



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Sentencia

Acapulco, Guerrero, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos, los autos para dictar sentencia definitiva en el expediente **5826/2025**, relativo al juicio oral mercantil promovido por ***** ***** ***** , contra ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** , y;

RESULTANDO:

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.

Mediante escrito presentado el **treinta de abril de dos mil veinticinco** en el Buzón de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, recibido en la oficialía de partes de este juzgado, siete de mayo siguiente, *********
******* *******, por propio derecho, demandó en la vía **oral**
mercantil de ******* ***** ***** *******
******* *******, las siguientes prestaciones:

“a) El cumplimiento de contrato de Seguro de Automóviles
Agencias- Amplia, número de póliza *****, y/o la póliza
vigente al momento del siniestro, celebrado con la demandada
con cobertura por daños materiales que ampara al vehículo
******* ** *******, Serie *********, Modelo
2024, Motor *****

b) Derivado de lo anterior demando la total reparación de mi vehículo asegurado, o en su defecto el pago de la suma \$*** ** moneda nacional), por concepto de daños materiales por pérdida parcial, que corresponde a la cobertura y servicios amparado en la póliza contratada.**

c) el pago de las primas de seguro efectivamente pagadas a partir del 28 de septiembre de 2024, fecha en que se atendió el siniestro de mi vehículo asegurado.

d) El pago de la Indemnización por mora a la que se refiere el artículo 276 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas, que será calculada en liquidación de sentencia.

e) El pago de los intereses moratorios que resulta por el incumplimiento de la obligación a cargo de la institución de seguros hoy demandada, calculada según lo dispuesto por el

párrafo segundo, del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, computados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta a total conclusión del presente asunto concepto que se liquidará en ejecución de sentencia.

SEGUNDO. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. Por acuerdo de **ocho de mayo de dos mil veinticinco**, se registró y se admitió la demanda en el libro de control electrónico bajo el número *********; asimismo, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ordenó su emplazamiento, para lo cual se suspendió la audiencia para la debida integración de la Litis.

Por escrito acordado mediante proveido de veinte de
agosto de dos mil veinticinco, *****

***** ** ***** ***** , por conducto de su propietario
**** ***** ***** ***** , se apersonó al juicio, se le
tuvieron por hechas sus manifestaciones y se dio vista a las
partes para que manifestaran lo que a su interés legal
conviniera.

Mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, las partes desahogaron la vista en relación al apersonamiento del tercero llamado a juicio, y la parte demandada promovió incidente de falta de personalidad mismo que se reservó acordar en audiencia preliminar; asimismo, en dicho acuerdo se señalaron las once horas con treinta minutos del seis de octubre de dos mil veinticinco para el verificativo de la continuación de la audiencia preliminar.

En seis de octubre de dos mil veinticinco tuvo verificativo la continuación de la audiencia preliminar, se desarrolló la etapa relativa a la depuración del procedimiento y analizó la legitimación de las partes, de igual manera, el juez otorgó el uso de la voz a las partes para que realizaran sus manifestaciones en relación al incidente de falta de personalidad. Posteriormente, después de escuchar las manifestaciones de las partes, el Juez declaró fundado el incidente y otorgó a la tercera llamada a juicio el plazo de diez días hábiles para que exhibiera la documental idónea para acreditar su personería, motivo por el cual se suspendió la audiencia y se reservó señalar fecha y hora para su continuación.

En acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veinticinco, el tercero llamado a juicio aclaró que por un error involuntario se asentó *****

El diez de noviembre de dos mil veinticinco tuvo verificativo la continuación de la audiencia preliminar en la cual al no haber excepciones dilatorias se procedió al inicio a la etapa de conciliación o mediación, en la cual las partes no llegaron a ningún acuerdo, por lo que se declaró cerrada la etapa de conciliación.

Posteriormente, se continuó con la etapa de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, se admitieron tanto a la accionante como a la enjuiciada diversas **documentales**; la **instrumental de actuaciones**; la **presuncional legal y humana**.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

***** **** ; de igual manera, la pericial en materia de mecánica automotriz y tránsito terrestre y avalúo ofrecida por la parte demandada y con los puntos de ampliación ofrecidos por la parte actora.

Por otra parte, no se tuvo por admitida la documental consistente en reconocimiento de documento ofrecida por la parte actora a cargo de ***** , por lo que para la audiencia de juicio se fijaron las **once horas con diez minutos del diez de diciembre de dos mil veinticinco.**

QUINTO. AUDIENCIA DE JUICIO. El diez de diciembre de dos mil veinticinco, tuvo verificativo la audiencia de juicio, en la que se otorgó el uso de la voz a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación a la falta de rendición de los informes solicitados, posterior a que las partes formularan sus manifestaciones, el juez ordenó regularizar el procedimiento a efecto de corregir la denominación de la agencia a la cual se ordenó girar los oficios en auto de nueve de diciembre de dos mil veinticinco, información que requirió al actor.

Por otra parte, en relación a la ratificación de documento con cargo a ***** , se hizo constar la inasistencia de dicha persona, para lo cual se ordenó requerir nuevamente su presentación ante el Juzgado, apercibiéndola con una multa en caso de no comparecer en la fecha y hora que se fijaría.

Luego, tuvo verificativo el desahogo de la prueba confesional ofrecida por las partes y la ofrecida por la demandada al tercero llamado a juicio.

Seguidamente, se suspendió la audiencia y se reservó señalar fecha para su continuación hasta en tanto no se

Mediante acuerdo de trece de abril de dos mil veintiséis se tuvo por rendido el informe a cargo de Trascendencia automotriz Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera.

En la citada fecha se llevó a cabo la continuación de la audiencia de juicio, en la que se desahogó la pericial en materia de mecánica automotriz, tránsito terrestre y avalúo.

Mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil
veintiséis, el tercero llamado a juicio objetó el dictamen
pericial emitido por el perito *****

LUIS ANGEL SANCHEZ ARCINIEGA
706a6620636a6633000000000000000001639f
05/05/29 14:53:24



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

con treinta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintiséis para la continuación de la audiencia, se ordenó la presentación de la citada persona, para lo cual se ordenó el uso de la fuerza pública para su debida presentación en la fecha y hora citada, girándose oficio al Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, a efecto de que en auxilio de este Juzgado ordenara a quien correspondiera, la localización y presentación de ***** , oficio que se dejó a disposición de la parte actora para que realizara el trámite correspondiente, apercibida que de no comparecer a recoger el citado oficio, se declararía desierta la prueba de ratificación de documento a cargo de *****

El dieciocho de septiembre de dos mil veintiséis, tuvo verificativo la continuación de la audiencia de juicio en la cual se hizo constar que la parte actora no compareció a las instalaciones del Juzgado a recoger el oficio dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para la localización y presentación de ***** , a fin de desahogar la prueba de ratificación de documento, por lo cual, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en audiencia de veinte de agosto del año en curso y se declaró desierta dicha probanza.

Se declaró cerrada la etapa de desahogo de pruebas y se abrió la etapa de alegatos en la que la demandada y el tercero llamado a juicio formularon los de su intensión, y declaró por precluido el derecho de la parte actora de formular los suyos, debido a su inasistencia.

al se em
DERANDO

En el Estado
z, es lega
nte juicio,
racción II,

la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, el primer y único organismo que tiene facultades para emitir y hacer cumplir las disposiciones administrativas que regulan el tránsito de personas y mercancías entre la República Mexicana y el extranjero, en los límites terrestres, marítimos y aéreos de la República Mexicana, de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración (Ley de Migración, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 26

igió some
n federal;
e los artí
Comercio
ntablar su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ofreció pruebas, sin que opusiera excepción de incompetencia, por lo cual precluyó su derecho para hacerlo, sometiéndose así tácitamente a la competencia de este juzgador.

SEGUNDO. PROCEDENCIA DE LA VÍA. La vía oral mercantil resulta la idónea para tramitar el presente juicio, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, fracción XVI y 1049, ambos del Código de Comercio, la controversia que aquí se ventila deriva de actos comerciales, como lo es el **contrato de seguro**, en tanto que, por disposición de los numerales 1055 y 1390 Bis de la citada legislación, los juicios mercantiles son, entre otros, orales, sin limitación de cuantía, a condición de que sea de cuantía determinada.

Siendo que el caso a estudio se demanda como acción principal el cumplimiento del contrato de seguro de vehículos celebrado con la parte demandada.

Por otra parte, resulta infundada la excepción que hace valer la tercera llamada a juicio, pues las actividades que realiza si se contemplan como acto de conformidad con el artículo 75 del Código de Comercio, específicamente en su fracción VIII, que considera actos de comercio a las empresas de transporte de personas o cosas, por tierra o por agua, así como en la fracción XXV o por analogía como una empresa o prestación de servicios lucrativos de carga y maniobras

TERCERO. LEGITIMACIÓN. Previo al estudio de fondo, se analizará la legitimación de las partes, por ser un presupuesto procesal de estudio oficioso, que atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, que por tanto, lógicamente, sólo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Época, Tomo XIV, Julio de 2001, página 1000, con registro 189294, del rubro y texto:

“LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir legitimación *ad causam* sobre el derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los interesados.”

Bajo ese contexto, se procede al estudio de la legitimación de las partes.

A manera de introducción, es preciso señalar, que a partir de la interpretación de los artículos 29 y 33, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y los numerales 2029, 2033 y 2036 del Código Civil para el Distrito Federal, en la contradicción de tesis 26/97, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La materia de la contradicción versa sobre si las facturas no objetadas que describen los bienes que la amparan y que tienen un "endoso", presentadas por el tercero extraño al juicio principal, con las que se pretende acreditar la propiedad, son válidas y suficientes para acreditar en el juicio de amparo el interés jurídico del tercero a quien se le embargan bienes de su propiedad, en un juicio en que no interviene y le es ajeno.

$$(\dots)$$

Respecto de este tema, este Alto Tribunal sustentó la tesis jurisprudencial siguiente: "ENDOSO. LA SOLA FIRMA AL REVERSO DE LA FACTURA DE UN AUTOMÓVIL NO LO CONSTITUYE, PERO SÍ ES UN INDICIO DE QUE EXISTIÓ UNA TRASLACIÓN DE DOMINIO". (se transcribe).

Del anterior criterio se advierte que la firma al reverso de la factura que detalla un automóvil, no constituye un endoso, toda vez que la propiedad de los bienes muebles (automotores), normalmente se transmite por compraventa, donación, permuta, herencia, pago de adeudo e, inclusive, prescripción, mas no por endoso, pues éste es una forma de transmisión propia de los títulos de crédito y no de los automóviles, según se desprende

Lo anterior es correcto, según se advierte del contenido de los preceptos legales señalados en el párrafo anterior, que a la letra dicen: (se transcriben)

De igual manera, de la propia tesis se desprende otra conclusión a la que arribó el Tribunal Pleno, en el sentido de que la firma al reverso de la factura, conforme al uso comercial, constituye un indicio de la cesión de derechos, según haya sido la operación concertada.

Los artículos 2029, 2033 y 2036 del Código Civil para el Distrito Federal, literalmente dicen: (se transcriben)

Ahora, como bien se dijo en la citada tesis jurisprudencial, la firma en el reverso de la factura entraña el acto jurídico de compraventa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2248 del Código Civil para el Distrito Federal, que literalmente dice: (se transcribe)

LUIS ANGEL SANCHEZ ARCINIEGA
706a6620636a66330000000000000000001639f
05/05/29 14:53:24



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

el otro se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero.

Los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos cuando el dueño de un vehículo se obliga a transmitir al otro contratante la propiedad del bien mueble; voluntad que se manifiesta al plasmar su firma al reverso de la factura que detalla dicho bien, que normalmente en forma equivocada se acompaña de la expresión "cedo los derechos de la presente factura", en tanto que el otro contratante, a su vez, se obliga a pagar un precio cierto y en dinero a cambio del vehículo. Ciertamente, es normal que en los llamados "endosos" de las facturas no se especifique el precio que se pagó por la enajenación de los bienes amparados por dichos documentos; sin embargo, no por ello debe entenderse que no existe uno de los elementos de la compraventa, consistente en la exigencia de que uno de los contratantes se obligue a pagar una cantidad cierta y en dinero a cambio del bien amparado por la factura, toda vez que en estos casos existe un precio cierto y determinado señalado en el propio documento.

Por tanto, hasta aquí es posible concluir que legalmente la firma que aparece en el reverso de las facturas que detallan bienes muebles, no constituye un endoso ni una cesión de derechos, sino una operación de compraventa de los bienes muebles detallados en dichos documentos privados (...)".

En el caso, es conveniente establecer que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que ***** *****

***** reclama de *****

***** ** ***** *****, el cumplimiento del contrato de seguro, por concepto de daños materiales o, en su defecto, el pago de la cantidad de ***** ** ***** *****)

*** ***) moneda nacional), por concepto de daños materiales por pérdida parcial, respecto de la póliza número ***** con vigencia del treinta de enero de dos mil veinticuatro al treinta de enero de dos mil veinticinco, en la que aparece como asegurado ***** , y como vehículo asegurado el descrito como: *****

*****, Modelo ****, Motor *****

por *****
to del cua
s.
■ ■■■■■

derecho c
ónica regu
facturas

te Juzga
to en el C
Servicio
estatus



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

indubitable una **continuidad correcta** en la cadena de **transmisiones de derechos**.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 2024497, rubro y contenido siguiente:

“FACTURAS. LA INFORMACIÓN GENERADA O COMUNICADA QUE CONSTE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O EN CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA, OBTENIDA A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR QUE AQUÉLLAS CONTIENEN, SE RECONOCE COMO PRUEBA PLENA. De los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se advierte la exigencia de expedir las facturas en los formatos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que se consigne en ellos el nombre del comerciante o prestador de servicios, la fecha de expedición, un número de folio consecutivo, datos del expedidor y del cliente, incluido el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de ambos, relación de las mercancías o servicios, su importe unitario y total, entre otros. Por tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros documentos privados simples, al compartir algunas características con los documentos públicos. En ese orden de ideas, las facturas atribuidas a cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o sustracción indebida. Así, respecto del cliente, partiendo del principio de que el documento proviene del proveedor y que a nadie le es lícito constituirse por sí el título o documento del propio derecho, se exige la aceptación por el comprador, para que haga fe en su contra, de modo que sin esa aceptación sólo constituye un indicio que requiere ser robustecido con otros elementos de prueba, y en esto se puede dar un sinnúmero de situaciones, verbigracia, el reconocimiento expreso de factura ante el Juez, o de los hechos consignados en ella; el reconocimiento tácito por no controvertirse el documento en el juicio la firma de la copia de la factura en señal de recepción del original o de las mercancías o servicios que éste ampara, etcétera. Empero cuando no existe tal aceptación, serán necesarios otros elementos para demostrar la vinculación del cliente con la factura, que pueden estar en el propio texto de la factura o fuera de ella. Así, si la firma de recibido proviene de otra persona, es preciso demostrar la conexión de ésta con el cliente, como dependiente o factor, apoderado, representante o autorizado para recibir la mercancía. Por otra parte, dentro de ciertas facturas aparecen algunos metadatos, que son "datos acerca de los datos" y sirven para suministrar información sobre las referencias producidas, los que consisten en noticias que describen el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos. Así, por ejemplo, tenemos que el Registro Federal de Contribuyentes, tanto del cliente como de la emisora de la factura, aporta información adicional, esto es, al remitirse a la inscripción del registro aparece la cédula de identificación fiscal a nombre y

al de Contraloría. Aun así, las reformas fiscales se han adelantado, que en materia mercantil se han avanzado en los avances



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

a revalorizar las bases de datos como fuente primaria en la generación de la información; de ahí la importancia de los QR, que constituyen la evolución de los códigos de barras que sirven para almacenar información en una matriz de puntos o mejor dicho, un código de barras bidimensional que se enlaza a un sitio web, que en este caso es al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que proporcionará los datos que aparecen en la factura, de lo que se colige que la información puede obtenerse de dos sitios, uno el que aparece en la misma factura (papel) y otro dato que se obtiene de la página del SAT, que es el lugar a donde remitió el código QR, lo que proporciona mayor certeza de las operaciones mercantiles. En otro orden de ideas, anteriormente las facturas no contaban con cadena original, ni sello o firma digital, pero de conformidad con el artículo **210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles**, se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y para valorar la fuerza probatoria de la información, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital o código QR, dichos elementos generan convicción en cuanto a su autenticidad, por lo que su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla.

Por tanto, al haberse acreditado el acto jurídico traslativo de dominio (compraventa) y la certeza jurídica del bien de procedencia lícita (CFDI verificado), y al adminicular la póliza de seguro a favor de la actora asegurada y el contenido en la factura antes descrita, adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 1296 del Código de Comercio, por lo que se estima que son aptas para acreditar la propiedad de la parte actora respecto del automóvil asegurado.

Aunado a que, en términos de lo dispuesto por el artículo 798, del Código Civil Federal,¹ tratándose de bienes

¹ Artículo 798.- La posesión da al que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos legales. El que posee en virtud de un derecho personal, o de un derecho real distinto de la propiedad, no se presume propietario; pero si es poseedor de buena fe tiene a su favor la presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o derecho poseído.

muebles, como en el caso, la posesión hace presumir la propiedad.

De manera que, la parte actora ***** , cuenta con legitimación en la causa, en términos de lo establecido por el artículo 1056 del Código de Comercio, pues comparece como asegurada y propietaria de la póliza de seguro ***** , la cual fue exhibida por la accionante, documento que constituye base de la acción, de la que se aprecia que la compañía de seguros demandada admitió la contratación del seguro bajo el citado número de póliza con el demandante, respecto del vehículo cuya indemnización se pretende.

Aunado a que, como se analizó en párrafos que anteceden, se tiene por acreditada la propiedad de la actora respecto del vehículo asegurado.

En cuanto a la demandada ***** compareció a juicio por conducto de su apoderado legal ***** , personalidad que les fue reconocida en audiencia preliminar; del mismo modo, se encuentra legitimada en el presente juicio, ya que expidió la póliza, respecto de la cual se reclama el cumplimiento de seguro.

Asimismo, la legitimación pasiva en la causa se surte, pues la compañía aseguradora dio contestación a la demanda presentada en su contra, aunado a que se encuentra ligada a la controversia, al haber aceptado la existencia de la relación contractual con la parte actora; de ahí que esté legitimada pasivamente en juicio.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 75/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Federación y su Gaceta, Tomo II, Enero de 1998, página 351, registro 196956, que dice:

“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.”

Por tanto, al quedar acreditado el vínculo jurídico existente entre las partes, se advierte que en el presente caso existe legitimación en la causa activa de la parte promovente y pasiva de la demandada.

En consecuencia, son infundadas las siguientes excepciones hechas valer por la parte demandada, relacionadas a la falta de acción y derecho de la actora así como la legitimación activa en la causa, dichas excepciones son las identificadas como **excepciones de falta de acción y derecho de legitimación activa en la causa; la derivada del artículo 1061 fracción IV del Código de Comercio, misma que consiste en la falta de acción y derecho de la actora; la excepción de falta de acción y derecho derivada de la objeción de documentos y la excepción de falta de legitimación activa en la causa, misma que se opone con apoyo en lo dispuesto en el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio.**

De igual manera, resultan infundadas las excepciones hechas valer por la tercera llamada a juicio, denominadas improcedencia del llamamiento a juicio y falta de acción y derecho, mismas que fueron hechas valer bajo el argumento toral de que no fue ella quien trasladó el vehículo asegurado; sin embargo, del desahogo de la prueba confesional, su propietario el señor **** * aceptó que el día veintiocho de septiembre de dos mil veinticuatro, la persona moral que representa si fue quien llevó a cabo el arrastre del vehículo asegurado dentro de la póliza materia de Litis.

Confesión que tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 1212, 1235, 1287 y 1289 del Código de Comercio, pues fue realizada de manera espontánea, por persona capaz de obligarse, sobre un hecho propio y concerniente a la Litis

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Para una mejor comprensión del asunto y del sentido que rige este fallo, resulta pertinente fijar correctamente la litis, atendiendo tanto al contenido íntegro de la demanda, como a la contestación a la misma.

Del análisis efectuado a la demanda y su contestación, se advierte que la materia de la litis en el presente asunto se constriñe a determinar si resulta procedente condenar a la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

demandada al cumplimiento de las prestaciones derivadas del contrato de seguro, al amparo de la póliza número *****; o en su defecto, si en la especie lo que procede es absolverla de cumplir con las referidas prestaciones por no encontrarse acreditados los elementos constitutivos de la acción o prosperar las excepciones y defensas opuestas.

La controversia debe resolverse dentro de los límites fijados por las pretensiones de la demanda y las excepciones opuestas al contestarla. En este juicio, la parte actora reclamó el cumplimiento de la póliza de seguro respecto de los daños que atribuyó al siniestro de inundación reportado el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro. Por tanto, la materia de decisión consiste en determinar si la aseguradora cumplió las obligaciones derivadas de ese siniestro y de la cobertura contratada.

El artículo 1327 del Código de Comercio dispone que la sentencia debe ocuparse exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas. Esa regla exige que el fallo guarde correspondencia con la demanda y la contestación, y que no resuelva pretensiones distintas de las planteadas, en el juicio oral mercantil, la litis se fija a partir de esos escritos y no se amplía por la sola aparición de otros hechos durante el desahogo probatorio.

QUINTO. ESTUDIO DE LA ACCIÓN. Una vez establecida la litis, se procede al estudio de la acción planteada, para lo cual tenemos que del análisis del escrito inicial de demanda, la parte actora reclama el cumplimiento del contrato de seguro de automóvil, celebrado entre las partes, en específico la cobertura de daño material, que se encuentra amparada por la póliza número *****.

Al respecto, el artículo 1 de la Ley sobre el Contrato de Seguros, dispone lo siguiente:

“Artículo 1°. Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato”.

Del precepto transcrito se advierte que en el contrato de seguro la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en dicho acuerdo de voluntades; por lo que la reparación del daño está basada en el principio indemnizatorio, como una herramienta con la que cuentan los ordenamientos jurídicos que no constituye un medio para procurar una ganancia al asegurado, sino que únicamente se encamina a resarcir las afectaciones sufridas por aquél.

De lo expuesto, se advierte que los elementos de la acción intentada, son los siguientes:

- 1. La existencia del contrato de seguro, del que derive la póliza de seguro y la cobertura correspondiente al riesgo materia de la controversia.**
- 2. La materialización del riesgo amparado en dicho contrato, esto es, la realización del siniestro previsto en la póliza.**
- 3. Que se dio aviso oportuno del siniestro a la institución aseguradora proporcionándole la información y documentación necesaria para conocer las circunstancias de su realización y sus consecuencias.**

Acreditados tales extremos, corresponde determinar si. Conforme a las condiciones pactadas en el contrato y las disposiciones legales aplicables, se actualizó la obligación indemnizatoria a cargo de la asegurada y, en su caso, si está



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

fue incumplida o si existe una causa legal o contractual que le exonere de su cumplimiento.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, la tesis 1a. CCXXIX/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 737, con número de registro 2004179, de contenido siguiente:

“CONTRATO DE SEGURO. LA EXISTENCIA DEL RIESGO CONSTITUYE UN ELEMENTO ESENCIAL PARA SU VALIDEZ. Por virtud del contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Es un contrato bilateral, oneroso y aleatorio, en el que el riesgo constituye un elemento esencial para su validez, ya que en caso de no existir, el contrato de seguro es nulo o se resuelve de pleno derecho, conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. El riesgo se define como un suceso dañoso, futuro e incierto, que es universal o general. En cambio, el siniestro constituye la realización del daño temido, que es de carácter particular. Esto es, al verificarse el riesgo previsto en el contrato se produce lo que se conoce como siniestro. En el caso de los seguros de vida, si bien es cierto que la muerte es un hecho futuro, pero no incierto - pues se sabe que inevitablemente acontecerá-, sí existe incertidumbre respecto de la fecha y forma en que tendrá lugar, por lo cual, es posible considerarla técnicamente como riesgo en materia de seguros. Sin embargo, si quien pretendía asegurar su vida fallece antes de que la aseguradora comunique su aceptación del contrato, el contrato de seguro no puede perfeccionarse porque le hace falta un elemento esencial para su validez: el riesgo de que el asegurado muera”.

Establecido lo anterior, debe precisarse que de conformidad con el artículo 1194 del Código de Comercio, el que afirma está obligado a probar. De ahí que, por regla general, la parte actora debe probar su acción y la aseguradora demandada sus excepciones y defensas.

Sentado lo anterior, se procede al estudio de los elementos de la acción ejercida.

PRIMER ELEMENTO DE LA ACCIÓN.

actora es
o, de la cu

clamado
s de septi
veintiocho
derivó e

237, 1238
go de Cor
el juicio,
autenticidad

expuesto,
ado dentro
ste sucedi
cuatro, y
de dos r
inticinco,

erior, la t
al Colegio
el Seman
XVI, Julio
Civil, re

**CIDENTE C
TUALIZAC**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARADO EN LA PÓLIZA, QUE LA ASEGURADORA EBE DESVIRTUAR. De la interpretación sistemática de los artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 77 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se desprende que el asegurado o beneficiario tiene el deber de notificar a la empresa aseguradora por escrito o a través del medio que pacten las partes contratantes, de la realización del siniestro (aviso), entendido éste como el daño o accidente que sufran los bienes o afecten a las personas aseguradas por el evento señalado como riesgo en la póliza de seguro. A través de ese aviso los asegurados, beneficiarios y, en su caso, los representantes de éstos, declaran en forma detallada sobre los pormenores del evento considerado como accidente, y la aseguradora toma por verdadero el dicho vertido en esas declaraciones, lo que tiene la presunción de que el deponente actuó de buena fe y que se actualizó el riesgo, salvo que la aseguradora demuestre que se incurrió en simulaciones o declaraciones inexactas para motivar la aparición del principio indemnizatorio, hipótesis en la cual quedaría liberada de todo pago.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 13783/2001. Arturo Cole Nevarez. 23 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez.”

Por tanto, quedó demostrado en autos que la eventualidad reclamada (sinistro por cobertura de daños materiales por pérdida parcial) sí se encuentra amparada en la póliza materia de la controversia así como en sus condiciones generales

De ahí que, se encuentren acreditados el **segundo** y **tercer** elemento de la acción, consistente en la actualización del riesgo amparado por el contrato de seguro y el aviso oportuno a la aseguradora

ACTUALIZACIÓN DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA. En relación al incumplimiento de la parte demandada a lo pactado por las partes en el contrato de seguro de pagar la obligación indemnizatoria respecto de los daños materiales por pérdida parcial, esta se encuentra

acreditada parcialmente, de conformidad con los motivos y fundamentos que a continuación se exponen.

La parte demandada opone la **excepción consistente en la reparación de la unidad motriz asegurada**, bajo el argumento toral de que el vehículo asegurado ya fue reparado respecto de los daños reclamados en el siniestro de veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

Para acreditar su excepción, y para cumplir con la carga de la prueba, la aseguradora ofreció las siguientes pruebas:

a).- Reporte completo de fecha veinte de mayo de dos mil veinticinco.

b).- Carta diagnóstico de fecha veintisiete de mayo, ambos de dos mil veinticinco.

Por su parte, la actora para acreditar la procedencia de su acción, ofreció las pruebas siguientes:

a) Póliza *****, con vigencia del treinta de enero de dos mil veinticuatro al treinta de enero de dos mil veinticinco, expedida por la aseguradora demandada.

b) Orden de admisión de vehículo asegurado.

c) Documental de veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, expedida por la demandada, mediante la cual le hicieron del conocimiento a la actora el pago de deducible correspondiente al siniestro *****.

d) Documental consistente en un escrito de fecha treinta de enero de dos mil veinticinco, emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mediante el cual le



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

informaron la conclusión de la reclamación presentada por la actora.

e) Documental consistente en una cotización de servicio de fecha doce de marzo de dos mil veinticinco, expedida por Master Motors Acapulco.

f) La confesional con cargo a la demandada.

Sentado lo anterior, debe decirse que **resulta fundada la excepción que hace valer la parte demandada**, como se expone a continuación.

De las documentales consistentes en el reporte completo de fecha veinte de mayo de dos mil veinticinco y la carta diagnóstico de fecha veintisiete de mayo, se desprende que el vehículo amparado bajo la póliza materia de Litis fue reparado de acuerdo al siniestro ***** generado por la demandada aseguradora; asimismo, precisa que no ha sido finalizada la reparación ya que durante el proceso de actualización, codificación y programación de unidades de mando en el equipo de diagnósticos ISTA, no permite la actualización del sistema por un daño en la caja de dirección (daño en su módulo electrónico), arrojando averías de falta de comunicación así como el remplazo del mismo, lo anterior derivado del arrastre del vehículo, realizado por la grúa para su ingreso en la agencia BMW Acapulco, en donde le ocasionaron daños en suspensión y por consiguiente, en la caja de dirección.

Si bien es cierto que de dicha documental se acredita que el vehículo materia de Litis no ha sido reparado en su totalidad, se precisa que esta situación es por daños diversos

os mil ve
1", mismo
lo manifi
MW Acap
por la p
probatorio
, 1238, 1
e Comerc
autenticida

por la p
probatorio
, 1238, 1
e Comerc
autenticada

enta daño
yen a ma
circunstan
cción ejer
niento de
onados po
mero *****
mil veinticu

en la sus
n parte de
de la ca
aun cuando
procede
ra respect
nunciame
e grúas o
os daños.

ora, debe
entro de la c
s que obr
a Póliza m
stó que la
ndiciones
ativo por
s mismas.

parte de
excepción
***** y la
excepción
de los artí
del Segur
mérito de
n de mane

es, la par
asiste la
spondient
a parcial
la cantida
chos dedu
sí como e
ahí que, a
os citados

e para qu
ción de
ante el sin
uatre



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de la póliza y de las cláusulas de las condiciones generales, toda vez que la accionante manifestó que descargó las condiciones de internet, lo cual pretende acreditar con la documental consistente en las copias cotejadas del escrito de queja, presentado por la actora ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Atento a las manifestaciones vertidas por la demandada en sus excepciones, la parte actora en su escrito de demanda y desahogo de contestación de demanda manifestó esencialmente que las condiciones generales de la póliza no le fueron entregadas, ni explicadas al momento de contratar, pues lo único que se le entregó fue la póliza materia de Litis, en el cual no se desprende que la asegurada tenga que pagar un demérito por el motor.

En el caso, al ser a la aseguradora demandada a quien le recae la carga de la prueba, y en su caso, debió de demostrar que **al momento de la firma del seguro** hizo del conocimiento de la asegurada las Condiciones Generales aplicables a la *Póliza de Seguro de Automóviles* número ***** , y que le entregó las referidas condiciones generales, lo cual no aconteció en este juicio; por tal motivo, al no haber acreditado sus afirmaciones, resultan **infundadas** las excepciones interpuestas.

En efecto, no le asiste razón a la aseguradora demandada, puesto que al momento de la expedición de la póliza, la aseguradora tenía la obligación de entregar a la contratante, no sólo la póliza del seguro sino también las Condiciones Generales aplicables.

Es así conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la

o de se
y de cele
n materia

orte de Ju
de la Gac
28, Marzo
11226, d

SEGURO.
LO 25 DE
FUNDAMENTAL
r consensu



seguro reflejados en la póliza no son los adecuados para el cliente, y éste cumplió con su obligación de proporcionar a la aseguradora la información que ésta le requirió, dicha inconsistencia no puede recaer en el cliente. De ahí que el contenido del artículo 25 citado, en el sentido de que se tendrán por aceptados los términos de la póliza si el cliente no solicita su rectificación, no puede tener el alcance de imponerle la responsabilidad en caso de que el seguro contratado no haya sido el adecuado, y mucho menos de liberar a la aseguradora de sus obligaciones en dicho supuesto, salvo que ésta acredite que los términos de la póliza son concordantes con la oferta, en otras palabras, con la información que le proporcionó el cliente, en cuyo caso, el asegurado tendrá que asumir la consecuencia de su omisión o falta, y estarse a los términos de la póliza que le fue emitida con base en la información que proporcionó; **pero si la inconsistencia deriva de una falta de la aseguradora, ya sea porque el riesgo que busca amparar el cliente, que está establecido en la póliza, no es compatible con el tipo de seguro que le fue emitido, o porque aquella no lo asesoró adecuadamente, la consecuencia de dicha falta no puede recaer en el cliente, y mucho menos liberar a la aseguradora de sus obligaciones, puesto que dicha interpretación vulnera no sólo el principio de igualdad entre las partes, sino también el principio de buena fe de los contratos, al exonerar a las aseguradoras del cumplimiento de las obligaciones que la ley les impone para compensar la situación de desventaja en que se encuentra el cliente.** El incumplimiento a dichas obligaciones por parte de la aseguradora debe tener una consecuencia en la aseguradora, en beneficio del cliente, y no viceversa. De lo contrario, se impone en la parte que está en desventaja y que además cumplió con sus obligaciones, la pérdida de su derecho, debido a una falta de su contraparte, que es la experta en materia de seguros, quien además resulta liberada del cumplimiento de las obligaciones que contrajo, sin tener que reembolsar a su contraparte el pago de las primas. Lo anterior, además de ser un incentivo negativo para las aseguradoras, pues les permite el incumplimiento de sus obligaciones, resulta evidentemente violatorio de la garantía de igualdad, puesto que se impone a las partes un tratamiento diferenciado que no está justificado y que resulta contrario a los principios que rigen las sanas prácticas en materia de seguros, así como el principio de buena fe de los contratos.

Amparo directo en revisión 828/2015. Organización Zahuayo, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en relación con la interpretación conforme a que se refiere la presente tesis; José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 186/2021 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que mediante acuerdo de presidencia

ש [L

para la
guro no
Genera

los términos
a respecto
a instituc

que aparecen
pueden ser
parte del
de las Com

ación d

necesaria
enía con
contrario

de las cob
ación de q

recibido
sica o digi
arte vulner
diendo a
tituciones

en a las
ra clara y
exclusion
establezo
éstos con
guros, y
ongruente
to a dicha
ener una
o viceversa

o viceversa

por las ra

2022 (11a

Parte de Jus
 Época d
 ción, Libro
 n registro

**IDOR. SU A
CIO DE SE**



OBLIGACIONES PARA LAS ASEGURADORAS PRIVADAS.

Hechos: Familiares directos de una persona que falleció como consecuencia de un accidente automovilístico (atropellamiento), promovieron juicio de responsabilidad en la vía civil para reclamar el pago de daños materiales y una indemnización por daño moral, ante el hecho de que, en la vía penal, el demandado conductor del vehículo (propiedad de distinta persona) fue sentenciado por homicidio culposo, pero fue condenado por una cantidad insuficiente respecto de los daños materiales, y absuelto de la reparación del daño moral. En la sentencia de segunda instancia del juicio civil, en cumplimiento a una previa ejecutoria de amparo, se reiteró la condena por daño material, y se tuvo por acreditado el daño moral, cuantificándose en cantidad líquida. Asimismo, con libertad de jurisdicción, el Tribunal de Alzada determinó que la sentencia, en cuanto hace a la condena por el daño inmaterial, deparaba perjuicio a la aseguradora que extendió póliza de seguro de automóvil con la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros (también llamada al juicio). Inconforme con lo anterior, la aseguradora presentó demanda de amparo directo, el cual fue concedido por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, para que el Tribunal de Apelación responsable valorara el hecho de que la póliza de seguro, conforme a sus condiciones generales, excluía el daño moral. Adicionalmente, dicho tribunal negó que el solicitante de amparo adhesivo tuviera legitimación para reclamar las condiciones generales del seguro, por no tener el carácter de asegurado o contratante, sino de un tercero conductor del automóvil. En desacuerdo con ello, el demandado interpuso un recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la obligación de proteger los derechos de los consumidores, prevista en el artículo 28 de la Constitución General, también concierne a los prestadores de servicios financieros y, particularmente, a los del sector asegurador. Por lo que las aseguradoras, como expertas en su actividad, están obligadas a brindar a sus clientes en forma fehaciente información completa, clara, sencilla y transparente, sobre todos los aspectos del seguro; entre ellos, sus términos, condiciones, coberturas y exclusiones, desde los primeros momentos de la relación, así como a cerciorarse de que el seguro ofrecido sea pertinente a las necesidades del cliente y que sus cláusulas correspondan cabalmente con la legislación aplicable y las buenas prácticas en dicho sector. Justificación: La protección al consumidor tiene rango constitucional y se ha reconocido como un derecho fundamental que tiene por objeto, esencialmente, la eliminación de las asimetrías en el proceso de consumo, así como la procuración de la organización y defensa de sus derechos, a través de la intervención estatal, en términos del artículo 28, párrafo tercero, constitucional. Dicha protección comprende también a los consumidores o usuarios de servicios financieros, y particularmente a los del sector de seguros. En este sentido, el contrato de seguro si bien constituye un acuerdo de voluntades, también experimenta cierta asimetría entre el proveedor del seguro y los usuarios de éste, al tratarse por lo general, de un contrato de adhesión, en el que existe un desequilibrio en las posiciones de la aseguradora como experta en la materia y el contratante o asegurado, en cuanto a transigir

esde el pr
ca velar por
so a la int
transpare
seguradora
información
n de las ex
n de que s
ispensable
su consenti
formación,
empre a ele
elación de c
n el artículo
ianzas. En
ones de ind
, las condic
modalidad
mo celebra
de seguros
ea congrue
iones por p
ara ésta en
estimarse c
io de autor
acto, no c
trata un seg
rriorarse c
el legislador
é la obliga
fatiza el de
s competen
ecto de lo
uradoras pri
que una
trato de s
ona aseg
las refer
nen cláu
tivamente
blemente
ier impre
or la
que se

tivamente
blemente
ier impre
or la
que se

on de
de l

Undécimo
Judicial de
página

**PARA QUE
QUIER ESTI
ES, ES N
TEMENTE**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Dicha entrega debe estar respaldada con la firma de la persona contratante o con cualquier otro medio idóneo que la acredite, por lo que las leyendas impresas en la carátula de la póliza, en el sentido de que las condiciones generales del contrato fueron entregadas, son ineficientes para demostrar que la persona que ha contratado un seguro efectivamente recibió el documento que contiene esas condiciones. Si bien con los avances tecnológicos, las condiciones generales de los contratos pueden constar en medios electrónicos, lo cierto es que cuando las compañías de seguros y las personas adquirentes de esos servicios acuerden que dichas condiciones generales pueden ser consultadas en páginas de Internet o en cualquier otro medio digital, debe dejarse constancia de ello, es decir, la evidencia de que la parte contratante tuvo acceso efectivo de manera completa al contenido del contrato (las condiciones generales y demás documentos que contengan cláusulas adicionales que en su caso lo integren), y que la página de Internet o cualquier otro medio digital consultados concuerdan con lo descrito en ese documento. Contradicción de criterios 139/2022. Entre los sustentados por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Pleno del Decimoprimer Circuito. 28 de septiembre de 2022. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Secretarios: Juan Jaime González Varas y Ricardo Martínez Herrera. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 239/2021, en el que consideró que es suficiente la impresión de una leyenda en la póliza donde indique que, al recibir la póliza, la persona asegurada también recibe y queda enterada de las condiciones generales y particulares que rigen el contrato. Aunado a que durante el juicio la persona asegurada exhibió la póliza respectiva, por lo que dicha exhibición constituía prueba en su contra; y El sostenido por el Pleno del Decimoprimer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2019, la cual dio origen a la tesis jurisprudencial PC.XI. J/3 C (10a.), de título y subtítulo: "CONTRATO DE SEGURO. LA LEY ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LA ASEGURADORA DE ENTREGAR LAS CONDICIONES GENERALES QUE LO RIGEN, Y ÉSTA CUMPLE CUANDO LAS COMUNICA FEHACIENTEMENTE AL ASEGURADO.", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, marzo de 2021, Tomo III, página 2271, con número de registro digital: 2022849. Tesis de jurisprudencia 159/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2022 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de diciembre de 2022, para

los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

A lo anterior se suma que las aseguradoras tienen la obligación de informar y asesorar de forma clara y precisa a sus clientes respecto del tipo de seguro que es más adecuado a sus necesidades, en atención al derecho del consumidor, de conformidad con los artículos 28, párrafo tercero, Constitucional y 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por lo que, es inconcuso que la enjuiciada debía acreditar en el particular que le hizo del conocimiento las condiciones generales que allegó al juicio, asesorándola de manera clara y precisa sobre la procedencia del mismo.

En ese contexto, tenemos que **no asiste la razón** a la demandada, cuando afirma que la parte actora tuvo conocimiento del contenido de las Condiciones Generales aplicables a la póliza contratada, pues como quedó demostrado, la demandada no acreditó con documento alguno que acredite de manera fehaciente la entrega de **dichas condiciones a la asegurada** (parte actora).

Motivo por el cual es procedente la devolución de la cantidad cobrada por la parte demandada a la actora por concepto de demérito del motor, toda vez que dicha obligación se encontraba estipulada en las Condiciones Generales de la póliza, y no en la carátula de esta, por lo cual, la actora no tuvo conocimiento de dicha obligación, porque como ya quedó precisado en el anterior estudio, la demandada no acreditó con documento alguno que la actora conociera el contenido de las citadas Condiciones Generales.

SEXTO. ESTUDIO DE LAS EXCEPCIONES

Se procede al análisis las excepciones que opuso la demandada.

02/0250 14:23:54
LUIS VINCEZ SAICHEN ABCINCA

da la

ada la
ción de
gurado f
por la pro

del escr
stó que l
asegur
del auto
por un t

moderad

moderad

moderad

moderad

moderad

apoderado
el vehíc
ingresad
embre de
efirió que

apoderado
el vehíc
ingresad
embre de
efirió que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

elementos probatorios que le permitan emitir una resolución apegada a derecho, en materias que requieren de conocimientos técnicos o científicos que escapan a la ciencia del derecho, de ahí que debe apoyarse en terceros ajenos a la controversia para obtener tales conocimientos.

Sobre el particular, la anterior Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación², expuso que la prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas, con conocimientos especiales en una ciencia o arte, ilustraran al juzgador en cuestiones técnicas que escaparan a su pericia y conocimiento.

Asimismo, determinó que ilustrar el criterio del juez implicaba explicarle en forma detallada, a su alcance, el contenido y significado de aquéllos enunciados y principios, y hacer una aplicación concreta, detallada e individual de los mismos a los hechos controvertidos del caso, para que el juzgador, con ese aprendizaje, pudiera por sí mismo, hasta donde fuera razonable y posible, efectuar los razonamientos técnicos o revisarlos, para que estuviera en posibilidad de determinar qué peritaje era el que merecía mayor credibilidad.

En ese tenor, es importante señalar que la pericial se aprecia al prudente arbitrio del juez, pues para la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción; éstas últimas, son las que se fundan en la sana crítica y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano, en las que interfieren las

² Tesis aislada (sin número), emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-180, Séptima Parte, página 376, registro electrónico 245542 de rubro: ***“PRUEBA PERICIAL. APRECIACIÓN DE LA.”***

[illegible]

o experim
be resolve
riencia y p
sin que
s requisito
aislada 2
orte de Jus
e en la pág
l, del Apé
000, del te
DARIO DE SU
prudencia re
enes pericia
verles hasta e
a legal, o ac
rendido, seg
nine respecta
erior, la pr
nar si el v
suspensión
andada, a
nparados
os mil ve
icio.
ar el con
ue estable
emás juicios
ada por e

o experim
be resolve
riencia y p
sin que
s requisito
aislada 2
orte de Jus
e en la pág
l, del Apé
000, del te

ORDIO DE SU
prudencia re
enes pericia
verles hasta e
a legal, o ac
rendido, seg
nine respecta

erior, la pr
nar si el v
suspensión
andada, a
nparados
os mil ve
icio.

ar el con
ue estable

emás juicios
ada por e

o experim
be resolve
riencia y p
sin que
s requisito
aislada 2
orte de Jus
e en la pág
l, del Apé
000, del te

o experim
be resolve
riencia y p
sin que
s requisito
aislada 2
orte de Jus
en la pág
l, del Apé
000, del te

o experim
be resolve
riencia y p
sin que
s requisito
aislada 2
orte de Jus
e en la pág
l, del Apé
000, del te

o experim
be resolve
riencia y p
sin que
s requisito
aislada 2
orte de Jus
e en la pág
l, del Apé
000, del te

o experim
be resolve
riencia y p
sin que
s requisito
aislada 2
orte de Jus
e en la pág
l, del Apé
000, del te

ORDIO DE SU
prudencia re
enes pericia
verles hasta e
a legal, o ac
rendido, seg
nine respecta

erior, la pr
nar si el v
suspensión
andada, a
nparados
os mil ve
icio.

ar el con
ue estable

emás juicios
ada por e



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Del precepto legal transcrito, se infiere que la opinión que vierten los peritos en el proceso, no vinculan de manera obligatoria al juzgador; por ello se deja al arbitrio del Juez otorgarle o no valor probatorio a los dictámenes periciales, de conformidad con los restantes elementos del juicio que existan y con los cuales se relacionen, y de no existir éstos aun así prevalece la idea de que el dictamen queda al prudente arbitrio del juez en cuanto al valor que se le otorgue.

De esta manera el dictamen pericial no conmina al juez a pasar por lo que el mismo establezca como si fuera cierto en sus contenidos y en todos los casos, sino que se le deja la potestad en conciencia de ver sus alcances demostrativos y de valor relativo de los hechos materia del juicio.

Sirve de apoyo, la tesis:

“PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS. El titular del órgano jurisdiccional es quien tiene a su cargo la valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos y por ende goza de la más amplia libertad para calificar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y puede concederles el valor de prueba plena o negarles eficacia probatoria, por considerar que están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque existan en autos otros elementos de convicción que unidos entre sí conduzcan al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en los dictámenes periciales.” (Época: Novena Época. Registro: 193509. Instancia: Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Tesis. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Agosto de 1999. Materia(s): Común. Tesis: I.8o.C.28 K. Página: 780).

En tales consideraciones, quien hoy resuelve, de conformidad con el artículo 1301 de la ley mercantil aplicable, estima que **la opinión del perito de la parte demandada**, ilustra adecuadamente al suscrito, para determinar en la forma en que lo pretende la demandada, por

lo que se le otorga valor probatorio por las razones siguientes:

Dictamen pericial parte demandada

Respecto a la opinión del experto *****, designado por la parte demandada, de su contenido se desprende que insertó el problema planteado, el cuestionario de las partes; el método y técnica utilizado; la metodología empleada; las observaciones y revisión del vehículo; consideraciones técnicas; sus conclusiones y las respuestas a los cuestionarios formulados por las partes.

Este juzgador determina **otorgarle valor probatorio**, al dictamen de mérito, en virtud de que sus conclusiones cuentan con sustento técnico y cronológico.

En el caso concreto, el perito de la parte demandada concluye de manera categórica a la pregunta marcada con la letra “e” lo siguiente:

“Los daños presentados en la unidad motriz, fueron causados por el mal manejo en la maniobra de arrastre de la grúa, ya que al usar el cabrestante que acciona el arrastre permite subir, bajar y fijar vehículos, y al utilizar el gancho que es el punto de conexión directa con la carga, y al ponerlo sin la debida precaución en el sistema de suspensión, afectando la caja cremallera de dirección hidráulica y parte de la suspensión al enrollar los cables que sostiene y mueven la unidad motriz, cada una de estas partes desempeña un papel crucial en la operación de la grúa, asegurando que pueda levantar y mover cargas pesadas de manera eficiente y segura, siempre y cuando sea realizada en el punto exacto que en el presente caso es en la parte frontal derecha, donde se ubica el enganche del remolque o gancho de remolque.”

Conclusión a la que llegó siguiendo la metodología y técnica precisada en su dictamen pericial, además de la observación del lugar de los hechos y, la observación y revisión del vehículo, pues además de la contestación a las



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

preguntas que le fueron formuladas por las partes, también agregó fotografías del vehículo señalando en ellas los daños causados al vehículo asegurado en la póliza materia de Litis en el presente juicio.

En consecuencia, al estar sustentado su dictamen pericial en los métodos y técnicas señalados así como en la observación del lugar de los hechos y la revisión del vehículo asegurado, se le otorga valor probatorio **al dictamen pericial en comento.**

Resulta aplicable la tesis I.8o.C.28 K de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, agosto de 1999, página 780, registro 193509, que dispone:

“PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS. El titular del órgano jurisdiccional es quien tiene a su cargo la valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos y por ende goza de la más amplia libertad para calificar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y puede concederles el valor de prueba plena o negarles eficacia probatoria, por considerar que están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque existan en autos otros elementos de convicción que unidos entre sí conduzcan al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en los dictámenes periciales.”

Ahora bien, con en el dictamen pericial queda acreditado plenamente que los daños causados en la suspensión del vehículo fueron causados por una tercera persona, es decir, no fueron causados por la parte demandada; asimismo, debe decirse que dichos daños a la suspensión del vehículo asegurado no forman parte de la Litis en el presente juicio, toda vez que el siniestro reportado por la parte actora el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro fue por “Daños por inundación nivel 1”, lo que se

Atento a lo anterior, se le dejan a salvo los derechos a la parte actora para que en relación a los daños causados a la suspensión del vehículo asegurado, los haga valer por la vía y forma correspondiente.

Por lo que, **procede absolver a la parte demandada,**
al cumplimiento del contrato de seguro respecto de los daños
materiales por pérdida parcial, amparado por la póliza
número *********, así como al pago de la suma de
******* ** ***** ***** ** ***** ******* moneda

Se absuelve a la parte demandada respecto de la prestación consistente en el pago de las primas de seguro



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

efectivamente pagadas a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinticuatro, puesto que la parte actora no acreditó con documental alguna que haya realizado la cancelación de la póliza materia de Litis, para la procedencia del pago de las primas no devengadas, motivo por el cual la póliza continuó vigente hasta la finalización de la vigencia, esto es, el treinta de enero de dos mil veinticinco.

Se condena a la parte demandada a la devolución del excedente pagado por demérito del motor, cantidad que asciende al total de ***** ** moneda nacional), así como al pago de indemnización por mora e intereses moratorios que hayan generado la citada cantidad.

Se otorga a la parte demandada el término de **quince días hábiles**, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de esta sentencia, para que acredite haber dado cumplimiento a esta sentencia; con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

OCTAVO. INDEMNIZACIÓN POR MORA E INTERESES MORATORIOS. Ahora bien, la parte actora solicita el pago indemnización por mora, según lo dispuesto por el artículo 276 fracción I, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

Bajo ese contexto, al haber prosperado la acción de cumplimiento de contrato, debe decirse que la prestación de indemnización por mora es **procedente**, en términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, el cual establece:

nacion
r de é
los en
meda na
la fecha
spuesto

os paga
a en U
párrafo
tasa se
captaci
versión
por el
correspo

oal se
pago d
obligada
mensua
obligac
costo d

s de lo
de ban
ico en
da uno
que se
eferenc
las fra

mediato
tasas, c
5 la ta
ables;
que se
fecha
de este

...sición a
...á única

da en que
a las fra
porte de
derechos
ablecida



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá efecto legal alguno. Estos derechos surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por la Ley para el pago de la obligación principal, aunque ésta no sea líquida en ese momento.

Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las partes o en la resolución definitiva dictada en juicio ante el juez o árbitro, las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo deberán ser cubiertas por la Institución de Seguros sobre el monto de la obligación principal así determinado:

VII. Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere demandado el pago de la indemnización por mora establecida en este artículo, el juez o árbitro, además de la obligación principal, deberá condenar al deudor a que también cubra esas prestaciones conforme a las fracciones precedentes:

VIII. La indemnización por mora consistente en el sistema de actualización e intereses a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del presente artículo será aplicable en todo tipo de seguros, salvo tratándose de seguros de caución que garanticen indemnizaciones relacionadas con el impago de créditos fiscales, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.

El pago que realice la Institución de Seguros se hará en una sola exhibición que comprenda el saldo total por los siguientes conceptos:

- a) Los intereses moratorios;
- b) La actualización a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, y
- c) La obligación principal.

En caso de que la Institución de Seguros no pague en una sola exhibición la totalidad de los importes de las obligaciones asumidas en el contrato de seguros y la indemnización por mora, los pagos que realice se aplicarán a los conceptos señalados en el orden establecido en el párrafo anterior, por lo que la indemnización por mora se continuará generando en términos del presente artículo, sobre el monto de la obligación principal no pagada, hasta en tanto se cubra en su totalidad.

Cuando la Institución interponga un medio de defensa que suspenda el procedimiento de ejecución previsto en esta ley, y se dicte sentencia firme por la que queden subsistentes los actos impugnados, el pago o cobro correspondientes deberán incluir la indemnización por mora que hasta ese momento hubiere generado la obligación principal, y

IX. Si la Institución de Seguros, dentro de los plazos y términos legales, no efectúa el pago de las indemnizaciones por mora, el juez o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, según corresponda, le impondrán una multa de 1000 a 15000 Días de Salario.

En el caso del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 278 de esta Ley, si la institución de

ne que s
un cuan
prestacion
l juez o á
condenar
s conform
evé, en l
que no
ntrato de
pagar
eciendo c
ominarán
fecha de
a nacion
la fecha
r interese
to.
cuando
contrato
a en unio
n coment
edó parci
trato de
esulta pro
de los in
e la Ley
tomar c

breve, en l
que no

que no
contrato de
pagar
ociendo

to. cuando contrato en unio n coment

trato de
esulta pro
de los in
a la Ley



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

moneda nacional), cobrada por la parte demandada por concepto de demérito de motor.

Por otra parte, de un análisis conjunto del dispositivo legal señalado en el párrafo que antecede, en relación con el artículo 71 de la Ley sobre Contrato de Seguro³, se concluye que el crédito que resulte del contrato de seguro es exigible treinta días después que la empresa ha recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación **o en su caso a partir de que resuelva la aseguradora si resulta procedente el reclamo.**

Asimismo, la interpretación lógica y jurídica de los numerales 66, 68, 69 y 70 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, permiten establecer que existen dos momentos diversos en que empieza a correr el término referido en el párrafo que antecede.

El primero, cuando la aseguradora obtiene de la asegurada, o por sí misma, las informaciones y documentos que le permitan conocer las circunstancias de la realización del siniestro y las consecuencias del mismo, a través de sus propios investigadores o ajustadores.

El segundo, cuando en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 69 de la legislación citada, exige y obtiene del asegurado, del beneficiario o de los apoderados de ambos, los informes y documentos complementarios.

De donde se advierte que, en el primer caso el término de treinta días empieza a correr desde la fecha en que la empresa recibe el aviso de haberse realizado la eventualidad

³ ARTICULO 71.- El crédito que resulte del contrato de seguro vencerá treinta días después de la fecha en que la empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación.

Será nula la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio.

de la fecha e
documentos

revisto en
a habido
de los
mera tale

veintiséis
corroborar
do, con nu
e se debe
ndo, hasta
***** **

la Ley d
al pago
a la que
*** **
), para el
a la que
versión, a



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Inversión de las instituciones de banca múltiple del país,
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación.

A partir del *segundo mes*, los intereses moratorios que corresponden a meses anteriores deben capitalizarse (sumarse al monto total de la indemnización) y sobre esta base aplicarse la tasa señalada anteriormente, y hasta el día inmediato anterior a aquél en que se efectúe el pago, los cuales deberán ser cuantificados mediante el **incidente de liquidación respectivo**, en la etapa de ejecución de sentencia, de ser necesario con el apoyo de expertos contables.

Por lo tanto, resulta improcedente la prestación del pago del interés legal a razón del 6%, pues los intereses moratorios van inmersos en la condena de conformidad con el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

NOVENO. DAÑOS Y PERJUICIOS. La parte actora reclamó el pago de daños y perjuicios, al respecto, debe decirse que dicha prestación es **improcedente**, dado que para ejercitar tal acción la parte demandante debió precisar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motiven sus reclamos, en el caso particular, el origen, la forma y términos en que dice le fueron causados los daños y perjuicios que reclama, sin que lo realizara de forma alguna.

En efecto, los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil Federal, prevén:

“Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.”

"Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse".

Tiene aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 703, con número de registro 227711), de rubro y texto:

Para la procedencia de la acción de daños y perjuicios es ineludible que la parte demandante pruebe fehacientemente la pérdida o menoscabo, que ha resentido, por la falta de cumplimiento contractual por parte de la demandada, y como consecuencia de ello, el cese en las ganancias lícitas que dejó de percibir, precisamente por la inobservancia de ese deber jurídico, así como el nexo de causalidad, esto es, que de haberse satisfecho en sus términos la obligación principal, la demandante no habría



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

sufrido la afectación reclamada y sí en cambio habría percibido tales ganancias.

Lo anterior tiene sustento en que la producción de un perjuicio patrimonial trae aparejada la infracción a un derecho subjetivo de carácter económico, por ello, la prueba del perjuicio patrimonial dejará evidenciado al mismo tiempo la trasgresión del derecho que protege al bien lesionado.

No obstante, la parte actora omite acreditar las circunstancias de modo, lugar y tiempo atinentes a la pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio con motivo del incumplimiento contractual por parte de la demandada.

De ahí que, en el caso, resulta improcedente condenar a la parte demandada al pago de daños y perjuicios.

Cobra aplicación, por identidad jurídica sustancia, la jurisprudencia III.2o.C. J/9, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, Octubre de 2000, página 1156 (registro 191076), que a la letra dice:

“DAÑOS Y PERJUICIOS, PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE, ES NECESARIO PROBAR LA EXISTENCIA DE LOS MISMOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Para que prospere la acción tendiente al cobro de los daños y perjuicios a que se refiere el artículo 2023 del Código Civil de Jalisco, anterior a sus reformas, no basta con exigirlo, sino que aparte de que deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de una obligación (artículo 2029 del sustantivo en consulta), también es necesario demostrar la existencia de los mismos, aunque la mencionada acción tenga el carácter de accesoria”.

Por tanto, **resulta fundada la excepción de falta de acción y derecho para reclamar el pago de daños y perjuicios.**

ARTAS Y

para justificar el resultado
disputado.
datos o documentos.
juicio ejecutivo
favorable.
nueva instancia
fracción siguiente.
dos sentencias
solutiva, sino
en este caso
instancias.

dos senter
solutiva, s
n este cas
s instancias

era que
ción I, de
e, según

[illegible]

e dice:

“COSTAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. NO PROCEDE SU CONDENACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. El artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio establece que la condena en costas siempre procederá cuando fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. Dichos juicios ejecutivos mercantiles son extraordinarios y sumarios, dirigidos a llevar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

a efecto los derechos que se hayan reconocido por actos o en títulos y basados en uno preconstituido con pleno valor probatorio, regulados en los artículos 1391 a 1414 del Código de Comercio. En ese sentido, las reglas de la fracción III del citado artículo 1084, no son aplicables a los juicios orales mercantiles, debido a que éstos son de naturaleza diversa y se encuentran previstos en un título especial, que comprende del artículo 1390 Bis al 1390 Bis 50 del citado código.”

De la misma manera **no se actualiza la fracción IV**, en donde se prevé el supuesto de que alguna de las partes hubiera sido condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutive, pues, en la especie, se trata de una sentencia dictada en primera instancia dentro de un procedimiento en el que la ley no prevé la figura de algún recurso ordinario.

Y, finalmente, **no se actualiza la fracción V**, ya que la desestimación de una pretensión, excepción, defensa, recurso o incidente, no genera necesariamente la condena al pago de costas, toda vez que para ello, es requisito indispensable, la ausencia de alguno de los elementos previstos en las propias normas para que pueda realizarse el estudio de fondo de la cuestión planteada, los cuales varían dependiendo de la vía que se ejerza y consisten en los mínimos necesarios que deben satisfacerse para realizar la jurisdicción; así, la procedencia de una acción, excepción, defensa, recurso o incidente, implica que se reúnan los requisitos elementales para que sea posible su estudio en cuanto a la cuestión planteada, así como su resolución y efectos; sin que lo anterior contemple cuestiones de fondo que no hayan sido acreditadas, porque éstas desembocan en su calificación de infundadas, lo que significa que ya se han superado los temas de procedencia y un análisis de la cuestión de fondo.

la acción
realizó el e
presupues

la demanda
, pues co
excepcio
ón ejercita
el estudio
ocesaes

la jurisprudencia del
Tribunal Supremo
de la Audiencia
Provincial de
Barcelona en el
Libro XVI
y texto a la

RCANTIL. A
A QUE S
V, DEL
a de la Sup
prudencia 1a
MERCANTIL
E LA IMPRO
CIONES, L
CURSOS S
ACCIÓN V
RCIO).", sos
ulo 1084, p
o de costar
defensas,
en improced
itadas que i
la ley o
echos cons



planteada, los cuales varían dependiendo de la vía que se ejerza y consisten en los mínimos necesarios que deben satisfacerse para realizar la jurisdicción; esto es que el caso en su integridad, tanto en su parte subjetiva como objetiva, apegado a la seguridad jurídica y debido proceso, debe reunir los requisitos normativos para que el juzgador pueda conocerlo y resolverlo. Así, la procedencia de una acción, excepción, defensa, incidente o recurso, implica que se reúnan los requisitos mínimos necesarios para que sea posible su estudio en cuanto a la cuestión planteada, así como su resolución y efectos; sin que lo anterior contemple cuestiones de fondo que no hayan sido acreditadas, porque éstas desembocan en su calificación de infundadas, lo que significa que ya se han superado los temas de procedencia y un análisis de la cuestión de fondo.”

Por otra parte, tampoco debe condenarse a la parte actora o a la demandada, a pagarse costas en estas instancia, ya que este Juzgador no advierte que alguno de ellos se haya conducido con temeridad o mala fe, debiéndose entender a ésta como una malicia notable o litigar sin justa causa; pudiendo consistir la temeridad o mala fe en diversos actos u omisiones del litigante, pues no sólo consiste en la falta de prueba de los hechos en que se funda la demanda o la contestación, sino en ejercitar acciones a sabiendas de ser improcedentes, oponerse a una acción sin causa justificada con pleno conocimiento de que son injustificadas, en la interposición de recursos o excepciones frívolos e improcedentes con el sólo propósito de entorpecer el curso del procedimiento.

Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, página 1536, cuyo rubro a la letra dice:

“COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O MALA FE PARA DECRETAR SU CONDENA. De conformidad con lo establecido en el artículo 1084 del Código de Comercio la condena en costas en los juicios mercantiles procede en dos

simple y llana. La acción de embargos procesales se litigan sin necesidad de que para proceder con el embargo se presente una causa. La tutela de los intereses de los diversos actores involucrados en la fase de demanda o de contestación de demandas de seguridad no es una causa justificada, en la medida en que es improcedente el procedimiento de embargo. La tesis suscitada por el Tribunal de Justicia de la Corte Suprema de la Faja Costanera dice:

MALA FE. PRECEPTO. El artículo 1.º de la Ley 17.331 establece que la mala fe del demandado prevenga la aplicación del embargo con temeridad. Sin embargo, la ley se refiere a la mala fe en la relación con el precepto, no al principio general de mala fe. El criterio del Juez de la Sala IV de la Corte para las costas de la demanda es tener presente la falta de fundamento o la de la demanda o la de la acción que fundamenta una pretensión, no el hecho o se caracterice la temeridad o se caracterice la temeridad al litigante. El fundamento de que el embargo sea improcedente no es suficiente para determinar la mala fe del demandado.

“COSTAS, TEMERIDAD Y MALA FE PARA LA CONDENACION EN CONCEPTO. El artículo 1084 del Código de Comercio determina que la condenación en

Así las cosas, este Juzgador determina que no existe
verdad o mala fe de la actora pues éste promovió el juicio



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

en que se actúa, al considerar que le asistía razón, sin que pueda advertirse que haya sido con el propósito de dilatar el procedimiento; así como tampoco puede considerarse que la parte demandada se hayan conducido con temeridad y mala fe, ya que, como se desprende de lo expuesto al analizar las excepciones que hizo valer, las mismas no resultan frívolas o carentes de bases, siendo necesario un estudio detallado a fin de declararlas infundadas; de igual forma, se advierte que los medios de convicción que allegó estaban encaminados a sustentar sus defensas, por lo que no existe razón para pensar que ofreció dichos medios de convicción con la intención de entorpecer o retardar el procedimiento, o que supiera de antemano que no le asistía razón, y que, no obstante ello, opuso sus defensas con el deliberado propósito de litigar sin justa causa y de afectar en su persona o en su patrimonio al actor, de tal suerte que al no demostrarse el elemento subjetivo, es decir, el ánimo de la demandada en perjudicar a la accionante para obtener una ventaja en su beneficio, no puede concluirse que al defenderse de las pretensiones jurídicas de su contraria hubiese actuado con temeridad o mala fe.

Por ende, al no existir en autos constancia alguna de la cual se advierta que cualesquiera de las partes ha hecho promociones inconducentes o en otros actos semejantes encaminados a entorpecer o dilatar el procedimiento contrarios a la buena fe, es que se estima justo y apegado a derecho no formular condena alguna a las partes por este concepto.

Por tanto, **resulta fundada la excepción de falta de acción y derecho para reclamar el pago de gastos, costas y honorarios.**

RESUELVE

SEXTO. Se absuelve a la parte demandada respecto de la prestación consistente en la devolución de las primas de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

seguro efectivamente pagadas a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinticuatro, en términos del considerando **séptimo** de esta sentencia.

SÉPTIMO. Se absuelve a la parte demandada del pago de daños y perjuicio, en términos del considerando **noveno** de esta sentencia.

OCTAVO. No se hace especial condena en gastos y costas en el juicio, en términos del último considerando de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución en términos de lo dispuesto en los artículos 1,390 Bis 22, 1,390 Bis 38 y 1,390 Bis 39 del Código de Comercio.

Así lo resolvió y firma **Genaro García Carrasco**, Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal, en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, asistido de **Luis Ángel Sánchez Arciniega**, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

169273545_3823000038501426031.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE					
Nombre:	LUIS ANGEL SANCHEZ ARCINIEGA		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.9f		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	30/09/26 21:36:12 - 30/09/26 15:36:12		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256				
Cadena de firma:	aa 97 e4 56 e3 17 00 89 01 05 03 e1 17 d0 dd dd f7 43 c1 3d 96 1c e0 d8 2f f6 2b a6 9d a1 99 35 1b 6a b3 b7 b6 3a 5d 3d 5d c7 8a 4b 7e 2d cb c6 2d b2 a4 c7 a0 c2 b2 df 5b 66 a6 f1 62 ef 37 51 c5 84 3a 7b 0b 12 6e 5a f8 1a f2 d9 dd 6d 43 f1 af 2f d2 25 38 de 6c 8d 3c 46 69 bd bf df e8 37 59 d1 0b eb 43 f5 b9 9d 8f 08 91 79 b7 34 bb d8 14 76 d9 2d 08 3b e4 9f b7 b7 c9 10 7b 14 1e 8d 61 f4 7a 74 ae b9 f3 aa 35 74 47 51 3b a4 49 0b 14 92 0e 3c dc 0f 92 31 76 5e fe 8e fe 3b 19 52 5a 54 77 4b 58 3f cc dd 89 a5 a7 56 5f 86 ff 24 26 47 74 ea 50 db a5 a7 11 de 30 82 d5 04 ad c3 04 9e 3e 38 e3 17 d5 3a f9 0f 0f 31 68 a2 f9 9a 71 24 50 00 4a 6a 20 55 ea 66 56 cc 5e d3 5c 5b b0 28 d7 e5 6b b7 42 fa 0f 93 32 4d fb db 8d e9 7b 66 5d 2a 45 03 a2 bf 27 d3 37 6a 05 1c b1 58 ee 77 3a af d2 a7 89 67 f4 ce 50 37 3c a2 1f cb 76 59 c1 69 d9 c7 2d fe fc 90 fd 35 2c 8f 86 70 7d 6b 31 46 4d fa 72 74 a1 3b ee 70 3b c5 0c be 9d 49 1f 3c 47 b0 20 e6 98 54 05 00 9e e9 16 da 57 60 10 57 0c 01 07 6a 99 3f cd 93 13 12 92 a3 67 b2 7f f9 db 24 40 78 38 64 76 6e 4d 10 ba 95 0d 2f b4 9d d1 44 ed 56 c5 d6 fc 2f be 11 55 92 35 a2 98 a3 6e af 80 4f 94 49 d3 6b 73 37 14 be				
OCSP					
Fecha: (UTC/ CDMX)	30/09/26 21:36:12 - 30/09/26 15:36:12				
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.9f				
TSP					
Fecha : (UTC/ CDMX)	30/09/26 21:36:12 - 30/09/26 15:36:12				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	213333913				
Datos estampillados:	MG+OSIyxNzD1+YTs88GzON/0Hwk=				



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	GENARO GARCIA CARRASCO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.62.1e	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	30/09/26 23:51:44 - 30/09/26 17:51:44	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	6d 71 9b 1c 36 50 8e 77 bf e1 1b 68 6a ba d8 12 5d 65 2a 7e 90 2c dc ff 4d b0 ec 15 0e 9b 56 3e 66 b6 96 40 38 8e c9 c6 69 10 ac 1a f5 67 f1 7b 1f 00 d3 5e a9 79 8d f6 12 aa 96 30 fd 92 aa 5a bc 55 8c c7 45 3a 37 d7 6b cb b8 cc 37 df d2 03 60 03 e8 03 b9 4b a3 a8 6b bb cc 68 5b 5e b6 a9 91 89 d9 9f 19 6f 80 26 7a 9f 36 a7 d1 23 bb c5 01 5c 3e 9e 6e cf d1 eb 7d 85 ac ca 27 11 85 fa 76 be a8 01 a3 cd 04 11 62 0e 5b ac bd cc 08 fe d2 3f 1f 30 14 88 79 77 ac 43 2f 81 93 8a d1 28 de 26 bd 0d f6 04 33 36 6a f1 5c 3e 8f 34 8c 33 8a ef 89 c5 7b ee c2 c0 6e e3 5e b2 6e 2b 9c 7e fb 0b 29 0d 4f 98 a8 75 0d 1e 5b 89 5c 52 d6 ce 4f d0 cf 2c 8f cc ba cd 7b 00 0c c5 ba bd ca cb 6d e8 74 dd d2 6b 0c eb 8d 18 fd 84 8c 64 aa 5d e5 42 fe b6 29 ed 47 f0 4c 72 91 f8 08 53 26 88 b1 99 cb 61 c2 de e9 29 8a 1c cd 63 5f be d1 9b 88 fe 77 48 11 7d d5 29 0e ae ad 87 57 43 f3 d7 c8 fc d4 a6 eb cb 02 d2 c1 d2 6e 90 49 38 7a f6 34 ac 6a 67 40 c2 9c f3 20 63 fc 7e fd 26 7a 3f 9e c7 94 89 49 72 eb a4 c5 da 76 16 98 f4 0e 4e 57 4c a8 6a 28 08 fa 19 45 46 b3 22 7b 70 4f e2 d2 b1 48 83 d5 d5 65 97 a1 2b d5 16 bb a3 6b d9 df 66 a5 1d 11 ce 4c c9 0e de 86 f5 66 61 b9 86			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	30/09/26 23:51:44 - 30/09/26 17:51:44			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.62.1e			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	30/09/26 23:51:45 - 30/09/26 17:51:45			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	213470716			
Datos estampillados:	JCPeQuup/vzGsd8I01w4AO9bbp0=			

El treinta de septiembre de dos mil veintiseis, el licenciado Luis Ángel Sánchez Arciniega, Secretario(a), con adscripción en el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.